

ya, no toca resolverla á esta Corte Suprema, sino á la autoridad común en el juicio correspondiente.

Por estas consideraciones y con arreglo á los arts. 101 y 102 de la Constitucion se revoca la sentencia del Juez de Distrito y se declara:

Que la justicia de la Union no ampara á Carlos Anaya contra los actos de que se queja.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen con testimonio de esta sentencia para los efectos legales, archivándose el toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—Presidente:—*Guillermo Valle.*—Ministros:—*M. Auza.*—*Eleuterio Avila.*—*Jesus Maria Vazquez Palacios.*—*Manuel Contreras.*—*Manuel Saavedra.*—*Francisco Vaca.*—*T. Melesio Alcántara.*—*F. J. Corona.*—*M. Rojas.*—*Eduardo Ruiz.*—*Enrique Landa*, secretario.

JOAQUIN PRIMO DE RIVERA.

El Lic. Joaquin Primo de Rivera, Dean de la Catedral de México, ocurrió al Juzgado 2º de Distrito del Distrito Federal, en solicitud de amparo, contra una orden del Ejecutivo de la Union, relativa á que el Lic. Juan A. Mateos, redima el precio de un local contiguo á la expresada Catedral, y contra el acto por el cual se mandó otorgar la escritura de subrogacion en favor del mismo Mateos; actos que en concepto del promovente, violan los artículos 16 y 27 de la Constitucion.

El Juez de Distrito negó el amparo y la Suprema Corte confirmó ese fallo.

-
- I. El precio del local denunciado y de cuya adjudicacion se trata, ¿es redimible, conforme á las leyes de la materia?
 II. ¿Tuvo facultades el Ejecutivo de la Union, para hacer esa adjudicacion?
 III. La controversia en que se aleguen los derechos del poseedor y los del denunciante, ¿puede resolverse en juicio de amparo?

C. Juez 2º de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que el Lic. D. Juan de D. Villarello ha ocurrido á este Juzgado en representacion del Dean de la Catedral de México Lic. D. Joaquin Primo de Rivera, en solicitud del amparo de la Justicia federal, contra la resolucion administrativa del C. Presidente de la República, dictada en 19 de Junio del presente año, en la que se sirvió acordar que el C. Juan Mateos redima conforme á la ley de 10 de Diciembre de 1869, el justiprecio del local contiguo por

Pedimento
fiscal.

el Oriente á la Catedral, cuya denuncia ha sido materia del expediente administrativo formado con tal objeto en la Sección 2.ª de la Secretaría de Hacienda y Crédito público.

Funda la procedencia del recurso contra ese acto administrativo en los artículos 16 y 27, fracción 2.ª de la Constitución, pues él importa una violación de las garantías que le otorgan al Dean, los artículos mencionados, atacando derechos que se hayan protegidos por el artículo 27 de la Constitución, 8.ª de la ley de 25 de Junio de 1856, 5.ª del Decreto de 13 de Julio de 1859, 99 del de 5 de Febrero de 1861 y el 14, sección 2.ª de la ley de 14 de Diciembre de 1874, cuyas disposiciones declaran exceptuada esa localidad de la desamortización, y la primera de ellas concede á las Corporaciones eclesiásticas el derecho de propiedad en los edificios destinados inmediata y directamente al servicio á objeto de la institución.

Expone para demostrar la violación de las garantías individuales mencionadas: que denunciada esa localidad por el Lic. Juan A. Mateos, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito público, como nacionalizada y sujeta á la ley de desamortización, se pasó la denuncia á este Juzgado para que el denunciante comprobara los hechos en que la hacía consistir.

Que con tal objeto, el Juzgado mandó recibir á prueba la denuncia con citación y que al ser citado su representado, manifestó que los bajos del Colegio de Infantes y bodegas de la Catedral que constituyen la localidad denunciada, nunca pertenecieron al Colegio Seminario y que son dependencias anexas, y estrictamente necesarias para el servicio del culto católico de la Catedral, cuyos hechos asienta que ha probado, por la información de siete testigos idóneos y con-testes en su testimonio y por la inspección ocular que se practicó en esas dependencias de la Catedral por el personal del Juzgado: resultando igualmente probado que tienen servido y actualmente sirven para guardar los útiles movibles del templo en tiempos determinados, y para dar instrucción á los infantes que sirven en el coro de la Catedral.

Que devuelto al Ejecutivo el expediente con esos elementos de hecho, pretendió obtener se declarara que no era procedente la adjudicación; y que como el Supremo Gobierno ha acordado en sentido contrario á la intención del Dean de la Catedral, sin motivar ni fundar el acuerdo relativo, ha violado en esa personalidad las garantías que otorgan los artículos 16 y 27 en la fracción 2.ª de la Constitución.

Admitido el recurso y negada por el Juzgado la suspensión de

los efectos del acto reclamado, evacuó el Gobierno el informe que se le pedia en cumplimiento del artículo 9.º de la ley de 20 de Enero de 1869, manifestando: que la comunicacion que le dirigió el Lic. D. Juan de Dios Villarello con fecha 19 de Junio (fojas 3), tuvo por objeto comunicarle como resultado de sus gestiones, el acuerdo en virtud del cual, quedaba subrogado el Sr. Mateos en los derechos del Fisco, mediante la redencion hecha por él, del precio de esas localidades, y en virtud del derecho expedito que para ello tiene el Ejecutivo respecto de esos bienes, conforme á la ley de 10 de Diciembre de 1869 y no una órden directa para molestar en su domicilio, posesiones, ni propiedad á la sociedad religiosa que ha promovido el presente recurso, supuesto que no ha llegado el caso á que se refiera la garantía constitucional que se invoca y llegado que sea ante los tribunales, puede ejercitar el quejoso sus defensas, por lo que no resulta que haya existido la violacion del artículo 16.

Que en cuanto á la segunda aseveracion que parece referirse al artículo 27 de la Constitucion, debe notarse:

Primero: que las piezas de que se trata no están anexas al templo de la Catedral, sino al Colegio de infantes, y se creian vendidas hace tiempo por el Gobierno; advirtiéndose que la retencion de ellos por parte del clero, no ha sido confirmada presunta, ni expresamente por el Gobierno, y porque no teniendo el Clero la propiedad de las anexidades de los templos, sino sólo su usufructo, el Ejecutivo tiene la facultad de hacerlo cesar á su arbitrio, conforme á las leyes, sin que ello importe violacion del derecho constitucional.

Pasados los autos al que suscribe, ha procurado para llenar el trámite de su cargo, presentar el anterior extracto con la mayor claridad que le ha sido posible para derivar de él las conclusiones jurídicas en virtud de las cuales debe el Juzgado denegar el amparo que se solicita por el Sr. Lic. Villarello, como apoderado del Dean de la Catedral Lic. D. Joaquín Primo de Rivera.

Dean, segun el Diccionario de la Lengua, es el que preside los Cabildos en la mayor parte de las Catedrales. Y Cabildo es el Cuerpo, Congregacion ó Comunidad de Eclesiásticos Capitulares pertenecientes á la dotacion de alguna Iglesia; siendo de notar que esta definicion es la misma que dá el Diccionario de Legislacion.

Son órdenes monásticas, dice el artículo 20, seccion 3.ª de la ley de 14 de Diciembre de 1871 para los efectos del artículo anterior. las sociedades religiosas cuyos individuos vivan bajo ciertas reglas

peculiares á ellos, mediante promesas ó votos temporales ó perpétuos y con sujecion á uno ó mas superiores.

El anterior artículo dice: "El Estado no reconoce órdenes monásticas cualquiera que sea la denominacion ú objeto con que pretendan erijirse." Luego el Sr. Lic. D. Joaquín Primo de Rivera, como Dean de la Catedral, no existe para el Estado, ni para la sociedad política, es incapaz de derechos y obligaciones, no es persona jurídica, y por lo mismo no puede promover segun la ley acciones ni recursos con ese carácter porque no es persona: es consecuencia legal que el recurso es improcedente porque no hay persona segun la ley que lo ejerce.

Pero se dirá que es el representante de la asociacion religiosa; católica, apostólica romana, más esto no aparece probado, por el nombramiento que se debe presentar y que debió insertarse en el poder que le confirió al Lic. Villarelló, y aparece de notoriedad que el representante de esa asociacion religiosa se denomina "Arzobispo."

Falta tambien bajo ese supuesto, el representante de esa asociacion religiosa, para promover el recurso y debe éste desecharse como improcedente.

No hay materia para el juicio: el art. 1.º de la ley de 12 de Julio de 1859, dice: "Entran al dominio de la Nacion todos los bienes que el Clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuese la clase de prédios, derechos y acciones en que consistan, el nombre y aplicacion que hayan tenido. Es consecuencia lógica que tanto los templos como las dependencias anexas á ellos que sean estrictamente necesarios para su servicio, tanto en la posesion jurídica como en el dominio pertenecen á la Nacion. Y como el dominio y la posesion son indivisibles, no hay posesion ni propiedad en el Clero, ni en la asociacion religiosa que representa, aun cuando el superior de esa asociacion haya obtenido por gracia ó por tolerancia el uso de una dependencia anexa á un templo. No habiendo posesion, no se concibe la posibilidad de violacion del artículo 16 de la Constitucion. (Antonio Gómez á la ley 45 de Toro, núms. 17 18 y 20.)

Pero se invoca el art. 16 del decreto de 14 de Diciembre de 1874, para probar que tiene la asociacion religiosa el derecho de uso en la localidad en cuestion y la cuasi posesion de ella.

El derecho y la obligacion son correlativos, y sorprende hasta la admiracion, que esa asociacion que ha protestado y protesta contra esa ley y sus concordantes, pretenda conforme á sus disposiciones un derecho sin cumplir las obligaciones que ella y su relativa in-

ponen al superior de esa asociación religiosa, pues no ha probado ni podrá probar que ha ocurrido al Supremo Gobierno para que le conceda el uso de esa localidad, como dependencia anexa y estrictamente necesaria al servicio del culto católico. (Art. 11, ley de 12 de Julio de 59, art. 7.º de la de 14 de Diciembre de 1874). Por tolerancia ó por gracia la había usado y estas causas no dan derecho perfecto para fundar jurídicamente una oposición.

Pero sobre todo, siendo una facultad potestativa inherente al dominio, que el que lo ejerce puede conceder el derecho de usufructo, uso ó habitación en su propiedad, gratuitamente ó por contrato, determinando ó no tiempo á la duración de ese derecho; de la misma manera y con la misma facultad puede refinarlo, y este acto importa legalmente la consolidación de la propiedad.

Y como por la primera de las causas mencionadas y no por otra, la asociación católica ha usado esa localidad, es indudable que al declararla adjudicable y adjudicarla el Supremo Gobierno al Sr. Matcos, ha decretado la consolidación y extinguido el uso que de ella se hacía.

De lo expuesto se infiere que ese acto del Poder Ejecutivo, es estrictamente constitucional, porque á él le incumbe esa facultad, en virtud del derecho administrativo que le dan las leyes en los bienes de la Nación y no á los otros departamentos del Gobierno General. Art. 89, frasc. 1.º de la Constitución. (Al márgen, Chaveau, compense et jurisdiction administrativ. Title 1.º, cap. 1.º, núm. 27, tom. 1.º)

No habiendo pues materia para el juicio, ni persona legal que pueda promover este recurso, el Promotor fiscal concluye pidiendo al Juzgado se sirva denegar el amparo que en él se solicita. —México, Diciembre 30 de 1882. —*Landa*.

Otro sí pido, que al devolverse el poder, quede de él copia certificada en los presentes autos por constituir él una prueba. —*Landa*.

México, Marzo 3 de 1884.

Ejecutoria.

Visto el recurso de amparo que ante el Juzgado 2.º de Distrito de esta Capital instauró el Dean de la Catedral, primeramente contra la determinación del Ejecutivo de la Unión, relativa á que el Lic. Juan A. Matcos redima conforme á la ley de 10 de Diciembre de 1869, el justo precio del local contiguo por el Oriente á dicha Catedral, ó sean los bajos del Colegio de Infantes, y bodegas del referido templo, y con posterioridad contra el otorgamiento de la escritura de subrogación á favor del mismo Matcos, con cuyas determinaciones cree el promovente violadas las garantías que otorgan los arts. 16 y fracción

2.º del 27 de la Constitucion. Visto el fallo del Juez 2.º de Distrito fecha 24 de Febrero del año próximo pasado, en que se deniega el amparo solicitado, en virtud de los considerandos siguientes:

Considerando. Primero: que el acuerdo del Ejecutivo de la Union contra el que se ha intentado el presente recurso, no llegó á convertirse en un acto real, efectivo, que trajera desde luego la perturbacion de los derechos que los quejosos creen tener á las localidades á que tal acuerdo se refiere, ni es tampoco una ley que importe violacion alguna de garantías, puesto que se limitó á que se dijera al representante de la Catedral, como resultado de sus gestiones, que se habia acordado que el C. Mateos redimiera el local denunciado con arreglo á la ley.

Segundo: que siendo esto así no es procedente la aplicacion del art. 1.º de la ley de amparo, porque éste así como el 101 de la Constitucion de que es reglamentario, exige necesariamente la existencia de una ley ó acto que viole las garantías individuales, y entónces si no hay aquellos requisitos, tampoco éstos pueden tener lugar.

Tercero: que esto es por lo que toca al fundamento del primer escrito de queja; pero como con posterioridad se presentó otro recurso ampliando los motivos de la interposicion del recurso, hay que entrar al exámen de éstos que se reducen al otorgamiento de la escritura de subrogacion de los derechos á esas misma localidades, hecho por el Gobierno de la Union á favor del C. Mateos.

Cuarto: que el apoyo de esta Instancia se reduce á manifestar que las piezas denunciadas y de cuya redencion se trata, no son redimibles, con arreglo á las leyes de la materia y que falta la causa legal del procedimiento.

Quinto: que examinando los requisitos del art. 16 constitucional invocado, se vé que en el caso que nos ocupa, la autoridad es competente porque lo es el Gobierno general para admitir redenciones: el mandamiento ha sido escrito y el procedimiento tiene por motivo y reconoce como causa la apreciacion de ser redimibles las localidades tantas veces mencionadas.

Sexto: que si estas no lo son en realidad, ó el Gobierno no ha obrado con arreglo á la ley, al proceder á la adjudicacion, son cuestiones de que no puede ocuparse el Juez en el terreno de los recursos de amparo, sino que supuesto el carácter contencioso que han tomado, su decision toca al Juez ó Tribunal respectivo yá que es este un caso cuya resolucion exige conocimiento de causa.— (Lozano, Derechos del hombre núm. 231 páj. 288).

Sétimo: que tampoco es éste el lugar para dilucidar el punto sobre posesion á las tantas veces repetidas localidades, porque en primer lugar es un hecho que el clero de la Catedral estaba en posesion de esas piezas, y en segundo, aún suponiéndola con todos sus requisitos, ella no hace variar la contencion iniciada, toda vez que no despoja á aquellos de su carácter de denunciabiles y sujetas á la adjudicacion ni desvirtua la facultad del Gobierno para admitir la redencion.

Octavo: que permitiendo el goce de esa posesion en favor de los quejosos, y que el local esté exceptuado de la adjudicacion, esto daría ciertos derechos á aquellos para encaminar sus promociones á la nulidad de la operacion por ejemplo, ó á cualquier otro recurso legal; pero esto de ninguna manera puede ser materia del amparo, ya porque en éste no puede dirimirse la naciente controversia de derechos, nacidos por una parte de la pretendida posesion, y por la otra de los que emanan de la misma adjudicacion.

Noveno: que por otra parte, el art. 16 invocado no tiene esa gran extension que pretende darséle, de tal manera que caigan bajo su proteccion todas las determinaciones de las autoridades con las que no se conformen los interesados ó porque tengan derechos que deducir ó por que supongan que no han sido conformes á las leyes relativas, pues en estos casos en que se necesita conocimiento de causa, lo natural, lo que está en el órden legal del enjuiciamiento, es que esa controversia se debata y decida por los Tribunales respectivos y en el juicio correspondiente que no es sin duda el de amparo.

Décimo: que varios comentadores de nuestra Carta fundamental haciendo el análisis del art. 16 citado, asientan que abraza la inviolabilidad de la persona, del domicilio, de los papeles y de las posesiones; que “la garantía individual que el artículo consagra, se refiere al derecho de seguridad tanto personal como real,” (Lozano idem, pájs. 266 á 280) á fin de que no se cometa ningun atentado contra ellas, y exige ciertos requisitos, determinadas fórmulas protectoras de la seguridad individual, que en el caso que nos ocupa hemos visto que existen.

Décimo primero: que respecto del art. 27, en su fraccion 2^a que es la invocada, evidente es que no tiene aplicacion en el caso que analizamos, porque ni se ha intentado justificar siquiera la propiedad á las localidades denunciadas ó que están destinadas inmediata y directamente al servicio del culto, para caer bajo la excepcion que en ellas se establece; pero aun cuando así fuese, no es en la sumaria tramitacion de un juicio de amparo donde pudieran recibirse esas

pruebas, donde pudiera ponerse en tela de discusión esa controversia.

Duodécimo: que por lo que toca á la personalidad del Dean de la Catedral, para promover el recurso de que se trata, inútil es ya ocuparse de ella, primero porque con ese carácter se le admitió en las diligencias que se mandaron practicar con motivo de la denuncia, antes que la redención se hiciera. Segundos: porque las mismas leyes conceden cierta aptitud en las representaciones, en los amparos, consecuentes con el espíritu de la Constitución, á fin de no oponer obstáculos á la reclamación de las garantías violadas y principalmente porque todo lo hecho está ratificado por el representante jurídico del señor Arzobispo, á quien el mismo C. Promotor reconoce con capacidad legal para representar á la asociación religiosa que ha promovido el recurso.

Por estas consideraciones y con arreglo á los arts. 101 y 102 de la Constitución federal, se confirma el fallo del Juez de Distrito en que se declara que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á los recurrentes, contra las determinaciones de que se quejan.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia, publíquese y archívese á su vez el tomo.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—Presidente:—*Guillermo Valle*.—Ministros:—*M. Auza*.—*Jesus M. Vazquez Palacios*.—*Posual Ortiz*.—*L. J. Corona*.—*Joaquín M. Escoto*.—*Eduardo Ruiz*.—*Enrique Landa*, secretario.
